

EDITORIAL

LAS ENSEÑANZAS DEL DIALOGO

Desde el 1° de junio pasado en que el Presidente Duarte anunciara su disposición para realizar una tercera ronda de diálogo con el FMLN-FDR, los acontecimientos en torno a este encuentro despertaron muchas expectativas y atrajeron mayoritariamente la atención de los diferentes sectores económicos, sociales y políticos del país.

Los diferentes obstáculos y contratiempos que han impedido la concreción del tercer encuentro y la enorme trascendencia que, como alternativa racional y justa de solución al conflicto, adquiere la reanudación del proceso de diálogo, nos conducen a plantear algunas reflexiones al respecto.

A pesar del carácter sorpresivo y aparente autonomía con que se han anunciado las convocatorias gubernamentales para realizar conversaciones con los representantes guerrilleros, es indudable que éstas fueron precedidas por una serie de acontecimientos principalmente nacionales, pero también de carácter internacional, que volvían inaplazable el anuncio de tales convocatorias.

Diferentes gobiernos democráticos e instituciones y organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y otros más, desde hace varios años y de manera reiterada, se han venido pronunciando a favor de una salida política al conflicto salvadoreño; resultando peligroso para la imagen democrática del gobierno, el no atender tales recomendaciones. Por otro lado, las ofertas gubernamentales de diálogo se anuncian en momentos que parecían ajustarse bastante bien a las necesidades políticas del gobierno de Reagan; la reunión de La Palma se realiza en plena campaña electoral para un segundo período del gobierno de Reagan; la convocatoria para una tercera ronda de conversaciones se produce cuando se enfrentaban problemas por la condicionalidad de la

ayuda norteamericana y el gobierno de Reagan se encontraba también luchando por conseguir la aprobación de 100 millones de dólares de ayuda a los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Sin embargo, las convocatorias de diálogo no habrían sido posible sin las presiones internas que las antecedieron. Nos parece, pues, que el determinante principal de estas convocatorias es interno. La Palma y Ayagualo fueron precedidas por una creciente agitación laboral y popular, principalmente por las fuertes presiones de las bases de apoyo eleccionario aglutinadas en la UPD que demandaban el cumplimiento del "pacto social" mediante el cual Duarte se había comprometido a "buscar la paz"; ciertamente, esto significó para la UPD y, en general, para todo el movimiento laboral, el ser víctimas de maniobras divisionistas impulsadas por el gobierno salvadoreño y norteamericano, este último principalmente a través del IADSL. De manera similar, la convocatoria al tercer encuentro de diálogo se produce luego de un acelerado deterioro político del gobierno y en medio de una creciente reactivación del movimiento laboral que, viéndose cada vez más amenazados por el agudizamiento de la crisis económica y tomando una mayor conciencia de que ésta sólo puede revertirse si previamente se supera la crisis política, incorporan entre sus reivindicaciones la necesidad de buscar con seriedad una salida política justa al conflicto, exigiendo la reanudación de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla.

Efectivamente, el generalizado descontento contra el gobierno y la creciente participación y presión popular a favor del diálogo, condujeron a la convocatoria del 1o. de junio. Pero, nuevamente, las organizaciones populares más activas en esta lucha, principalmente la UNTS, son víctimas de la arremetida gubernamental, acusándolas de desestabilizadoras, oponiéndoles la UNOC como organización paralela e intensificando las maniobras divisionistas dentro del movimiento sindical representativo.

Las circunstancias que han rodeado las convocatorias de diálogo reflejan, también, las fuerzas que frenan e impulsan el proceso de solución política al conflicto. Los acontecimientos que precedieron y sucedieron a las reuniones de La Palma y Ayagualo, mostraron los estrechos límites, impuestos y asumidos, con que cuenta el gobierno para emprender un proceso de solución política justa y realista; las continuas reuniones y negociaciones sostenidas por el Presidente Duarte con la Fuerza Armada y la empresa privada, evidenciaron que las restricciones del gobierno no provenían únicamente de Washington.

La experiencia frustrada del tercer encuentro tuvo mucho que ver con la oposición de esas mismas fuerzas. Si bien la Fuerza Armada no se opuso abierta y públicamente a la reanudación de las conversaciones, sí señaló los límites "constitucionales" en que éstas deberían enmarcarse y que concretamente se referían a discutir únicamente la deposición de las armas y la incorporación del FMLN-FDR al "proceso democrático". Esta actitud de la institución armada refleja que, si bien pudo haber avanzado en su profesionalismo durante los últimos años, no se encuentra dedicada

exclusivamente a los aspectos puramente militares de la guerra y que el peso de su participación política es considerable; la ampliación y profundización de los aspectos militares del conflicto y el hecho de que la guerra continúa siendo la estrategia que impulsa el gobierno de Reagan, le otorga un enorme peso a la opinión de los militares en las discusiones trascendentales del país.

La gran empresa privada salvadoreña, a través de sus voceros económicos y políticos, además de señalar los límites para las conversaciones también se opone abierta y públicamente a la reanudación del diálogo, argumentando no sólo la supuesta inconstitucionalidad de éste sino, también, cuestionando la legitimidad del gobierno para emprender el proceso.

Lo irónico de todo esto es que precisamente con estos sectores que limitan y se oponen al diálogo, es con quienes Duarte trató de conseguir "apoyo" y establecer alianzas para el "avance" del proceso. Fueron notorios los intentos del presidente por acercarse a las fracciones más extremas de la derecha política, expresada fundamentalmente en ARENA, con quien se habló de un posible arreglo conjunto que sirviera de respaldo al sí o al no del gobierno en las conversaciones con la guerrilla.

No podríamos afirmar que el gobierno de Reagan se opone abierta y públicamente al diálogo; pero sí podemos decir con certeza que efectivamente no es la salida política la que está impulsando, por el contrario, su estrategia continúa siendo la vía militar y dada la extrema subordinación de los asuntos nacionales a los intereses norteamericanos, no cabe la menor duda que aquí radica el obstáculo más importante para el avance del proceso de diálogo. La estrategia militar impulsada por los Estados Unidos es el denominado "conflicto de baja intensidad", que en sus líneas generales contempla el desarrollo de una "guerra total" en los frentes económico, político, militar, social y psicológico, teniendo como objetivo no el territorio sino la población, a la cual hay que ganarse e involucrarla en las diferentes actividades de la guerra y "reconstruir la nación", contando para ello con los recursos, el control y dirección del gobierno norteamericano. Ciertamente, esta estrategia norteamericana se concretiza en el plan "Unidos para reconstruir", puesto en marcha recientemente por el gobierno salvadoreño.

Dentro de la guerra de "baja intensidad" el diálogo tiene cierto margen; los anhelos de paz del pueblo y sus exigencias por una salida política al conflicto pueden ser utilizados para "ganarse" a la población, precisamente de lo que se trata, como lo declarara el general Blandón, es de "ganar las mentes y corazones" de la población civil y qué mejor manera de hacerlo que enarbolar la bandera de la paz. En este contexto, el gobierno de Reagan puede estar dispuesto a permitir la realización de algunas conversaciones entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla, no sólo porque justifica y enmascara el proyecto contrainsurgente, sino también porque permite mejorar la imagen internacional del gobierno ganándose el "corazón" de la comunidad internacional y principalmente del público norteamericano, posibilitando algunos votos necesarios para garantizar la continuidad

de la ayuda económica y militar. Por esto es que el gobierno salvadoreño debe tratar, y de hecho lo hace como lo demostrara Sesori, de sacar el mayor provecho propagandístico de los frustrados intentos de diálogo; para asegurar el cumplimiento de este tipo de tareas, se le han asignado 67 millones de colones al Ministerio de Cultura y Comunicaciones para el próximo año.

Indudablemente que la fuerza impulsora del diálogo radica fundamentalmente en los sectores populares, en las amplias mayorías de la población marginadas y desposeídas. De hecho, y de manera más intensa desde principios de este año, sobre la base de una mayor conciencia y realismo, las mayorías populares han reactivado su presión a favor de la salida política al conflicto; se han movilizado, pronunciado y presionado en favor de la continuación del diálogo y de su participación en las reuniones. Sin embargo, parece ser que la presión de estos sectores, a pesar de ser mayoritarios, no es aún lo suficientemente fuerte para contrarrestar el poder económico y político de aquellos otros que se oponen al diálogo; y esta correlación de fuerzas podría ser la explicación del frustrado, y hasta ahora indefinidamente suspendido, tercer encuentro de diálogo entre el gobierno y la guerrilla.

No obstante, el diálogo continúa siendo, y de manera cada vez más urgente, una necesidad histórica. Después de casi 7 años de guerra podemos afirmar con certeza que la vía militar ya dio de sí todo lo que podía dar, que la continuación y ampliación de la guerra acarreará únicamente la destrucción del país, imposibilitando cualquier intento futuro de reconstrucción. La vía militar ha fracasado y no por falta de recursos técnicos y financieros; entre 1979 y 1985 el gobierno norteamericano ha enviado casi 550 millones de dólares en ayuda militar y más de 1280 millones de dólares en ayuda económica, además de los asesores y entrenamiento militar; adicionalmente, y en los mismos años, el gobierno salvadoreño ha destinado alrededor de 2700 millones de colones a gastos directos de la guerra y si a esto agregamos las asignaciones presupuestadas para 1986 y 1987, se alcanza la cifra de 4380 millones, contando actualmente con un ejército de más de 50 mil efectivos, batallones especializados en lucha contrainsurgente, decenas de miles de paramilitares, más de 60 helicópteros, decenas de aviones y demás medios técnicos para hacer la guerra. El resultado de todo eso ha sido únicamente la destrucción del país, más de 60 mil muertos, más de 5 mil desaparecidos, centenares de presos políticos, más de un millón de desplazados y refugiados, una mayor profundización de la crisis económica, social y política, agudizando los desequilibrios estructurales y acelerando el deterioro de las condiciones de vida de la población.

El desarrollo histórico del proceso de diálogo nos ha dejado una valiosa enseñanza: la condición necesaria para que un proceso de diálogo pueda terminar con la guerra y con la injusticia social que la origina, es el desarrollo de la presión organizada de las mayorías populares por la negociación política.

En primer lugar, porque han sido las mayorías populares las que más han sufrido los efectos directos e indirectos de la guerra. Han sido ellas las que han puesto los muertos y heridos, las víctimas de los bombardeos, los desplazados y refugiados; sobre ellas ha recaído fundamentalmente la represión, los desaparecimientos, las capturas y torturas. Como si esto fuera poco, sobre las mayorías populares se ha descargado también el peso de la crisis económica y el financiamiento de la guerra. Por ser las principales víctimas de la guerra y de la injusticia estructural, han sido las únicas que verdaderamente han deseado y luchado por la paz, por la justicia y la dignidad popular, condiciones indispensables para llevar adelante el proceso de diálogo.

En segundo lugar, porque las mayorías populares constituyen el único sujeto que organizadamente podría adquirir el tamaño y la fuerza para contrarrestar la dimensión de la intervención norteamericana, fuerza opositora determinante de la marcha del diálogo. Son las únicas suficientemente numerosas con enorme creatividad muchas veces evidenciada, con gran dosis de sacrificio y disposición a luchar, con un inculdicable espíritu de libertad e independencia puesto a prueba durante muchos años. Su potencial es tan grande y su participación tan decisiva que se han convertido en el objetivo fundamental de la "guerra de baja intensidad."

Por último, porque el carácter de sujeto histórico de las mayorías populares para impulsar el diálogo, se fundamenta en que el futuro de El Salvador es el futuro de las mayorías populares. El modelo económico, social y político de carácter elitista que ha prevalecido en nuestro país, ya alcanzó sus límites y su agotamiento es real. La única alternativa de vida viable en El Salvador pasa, ineludiblemente, por una reconversión del modelo actual hacia el desarrollo real y directo de las mayorías populares.